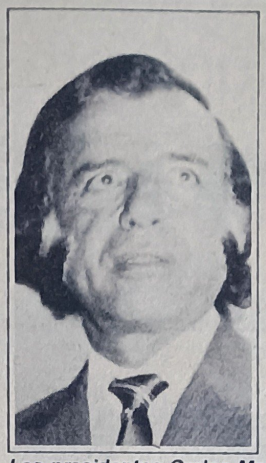
Generalizada venta de empresas del Estado

AMERICA LATINA SUBASTA "LAS JOYAS DE LA ABUELA"

por Federico Ferber, Buenos Aires, IPS

Casi toda América Latina se orienta hacia la enajenación de empresas públicas, a menudo como capítulo de amplios planes de reforma del Estado, e invariablemente como una respuesta a la crisis de la deuda externa, a la inflación, los números rojos de las cuentas fiscales y a la ineficiente administración.



Los presidentes Carlos Menem y Salinas de Gortari, al frente del PJ y el PRI respectivamente, están a la vanguardia de la privatización.

La venta de empresas del Estado, esa generalizada subasta de "las joyas de la abuela", contribuyó decisivamente este año al saldo positivo de la cuenta de capital de América Latina, un resultado desconocido desde el estallido en 1982 de la crisis de la deuda externa.

Aunque la mayoría de los gobiernos vendedores hacen reserva de las llamadas áreas estratégicas, hay también quien lo ofrece todo a los inversionistas, en propiedad o asociación, como Argentina, y el cartel regional de la subasta se presenta muy apretado para 1992.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el ingreso de capitales no crediticios se duplicó este año en la región hasta alcanzar 36.000 millones de dólares, con un aporte "cuantioso" de la llamada privatización de activos estatales.

El gobierno mexicano obtuvo siete mil millones de dólares por la venta de nueve bancos, exactamente el monto del superávit de la cuenta de capitales que la CEPAL atribuyó al conjunto de países latinoamericanos.

Mientras, la compañía anónima de teléfonos de Venezuela se revalorizó 110 por ciento cuando la venta de 40 por ciento de sus acciones se cerró con una oferta de 1.885 millones de dólares, mil millones por encima del precio básico.

Casi toda América Latina se orienta hacia la enajenación de empresas públicas, a menudo como capítulo de amplios planes de reforma del Estado, e invariablemente como una respuesta a la crisis de la deuda externa, a la inflación, los números rojos de las cuentas fiscales y a la ineficiente administración.

La identidad de ciertos gobernantes vendedores parece sugerir que se trata de una decisión inevitable, impuesta a la voluntad política por la fuerza de los hechos o por los signos del destino de sociedades empobrecidas en los años 80, "la década perdida".

A la vanguardia de la privatización se hallan el tentacular Partido Revolucionario Institucional, confundido durante más de 60 años con el Estado mexicano, al que aún en 1982 hacía crecer, y el Partido Justicialista de Argentina, creador de las mismas empresas que al recuperar el gobierno procede a vender.

A ellos se ha sumado este año el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que en su primer gobierno protagonizó dos episodios históricos del resignado proceso de fortalecimiento del Estado empresario, la nacionalización de la industria del hierro, en 1975, y del petróleo, un año más tarde.

Según un gran empresario argentino, Santiago Soldati, son tantas las posibilidades de privatización que habrá lugar para todos los interesados, ya sean de origen nacional o extranjero.

El gobierno argentino se propone desprenderse en 1992 de todas las empresas públicas y el plan mexicano afecta aún formas sociales de propiedad agrícola consagradas por la revolución de la segunda década del siglo y confirmadas entre 1936 y 1940 por el legendario presidente Lázaro Cárdenas.

En Venezuela se venderán 200 de 380 entidades de propiedad o participación estatal, y aunque el petróleo y el conjunto de industrias básicas permanecerán en el área pública, el gobierno prevé recaudar unos dos mil millones de dólares.

En conjunto, las compañías públicas o semipúblicas venezolanas generan 30 por ciento y gastan 45 por ciento del Producto Interno Bruto, y aportan 93 por ciento del ingreso de divisas.

Detrás de Chile, que comenzó la aplicación de su programa en 1973 tras instalarse la dictadura del general Augusto Pinochet y la completó virtualmente en 1989, al filo de la restauración democrática, ocho países sudamericanos han tomado el rumbo de la privatización.

El proceso enfrentó la resistencia sindical y a menudo el estancamiento en el Parlamento de los necesarios proyectos de reforma legal.

Bolivia y Uruguay se encuentran aún en la etapa del comienzo sobre la privatización de empresas públicas y supresión de monopolios estatales, en Paraguay se analizan los instrumentos legales del caso y Brasil avanza lentamente.

En tanto, el gobierno colombiano admitió en 1989 socios privados para administrar los ferrocarriles, renunció luego a su monopolio de puertos y telecomunicaciones y puso en oferta este año el Banco de Comercio.

Por fin, las autoridades peruanas solo lograron la venta de dos de las 23 empresas públicas puestas a subasta en febrero de este año.

El centro de estudios Unión para la Nueva Mayoría, de Buenos Aires, destacó en un informe global la significación del caso argentino en el panorama latinoamericano de privatizaciones, ya que el gobierno de Carlos Menem presenta para el año próximo el cartel más amplio de subastas de la región y no admite exclusiones.

El gobierno de Menem aspira a obtener en previsión máxima unos ocho mil millones de dólares por la subasta de empresas de servicios, como la distribución de gas, agua y energía eléctrica y de ferrocarriles, compañías navieras, correos y el tren subterráneo de la capital.

El programa comprende también la gigantesca Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresas siderúrgicas y más de dos docenas de factorías administradas por el Ministerio de Defensa.

Las sumas a obtenerse fortalecerán la hacienda pública, aunque su ingreso cesará lógicamente al pagarse la última adjudicación.

Al respecto, Soldati advirtió que "debe llegar" el crecimiento económico y la inversión del gobierno en educación y salud.

Simultáneamente, la influyente Unión Industrial Argentina reclamó la creación en 1992 de condiciones para el crecimiento y consolidar "una recaudación genuina", que deberá "sustituir como fuente de ingresos la venta de las joyas de la abuela".

Se agrava crisis económica en Brasil

Un año para no recordar

por Gabriel Canihuante. Río de Janeiro, IPS

Este año no dejará un buen recuerdo a los brasileños, quienes en general se quejan por el agravamiento de una crisis económica que se arrastra, con más o menos intensidad, desde marzo de 1990, cuando Fernando Collor de Mello asumió el gobierno.

La inflación, uno de los mayores tormentos del brasileño, deberá alcanzar en 1991 a poco menos de 500%, un nivel bajo si se compara con el registrado en 1989, de 1.700%, aunque es muy alto para un gobierno que prometió "eliminar totalmente" la inflación.

Uno de los reflejos de la gravedad de la crisis se vio en la ciudad industrial de San Bernardo del Campo, interior del estado de San Pablo, donde trabajadores, empresarios y diversos políticos realizaron en la segunda semana de diciembre una "vigilia cívica" contra la recesión.

Un curioso lema: "Trabajadores y empresarios unidos, jamás serán vencidos", llamó la atención de observadores que vieron al presidente de los industriales de San Pablo, Mario Amato, participar en un mismo acto con el presidente del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, y otros políticos locales.

El año 91 debe terminar con un crecimiento del PIB de 1%, pero esta cifra es una ilusión porque se compara a 1990, cuando hubo una baja de 4% del PIB, según los registros del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Se estima que el PIB per cápita de 1991 será de 1.933 dólares, el menor en los últimos siete años. En 1987, en su nivel más alto desde 1985, el PIB per cápita fue de 2.132 dólares, de acuerdo con los registros del Banco Central.

Brasil "sigue andando para atrás" y en proceso de pauperización, opinó el ex presidente del IBGE, Edson Nunes, al comentar el desempeño de la economía brasileña en 1991.

Para el presidente Collor de Mello, gran parte de las culpas por la presente crisis recaen en un grupo de empresarios que no quieren colaborar con los planes de estabilización y han insistido en maniobras opuestas a la modernización del país.

En un mensaje a los empresarios, el 16 de diciembre, Collor de Mello dijo que el gobierno no aplica más operaciones de socorro a las empresas en problemas financieros, una práctica habitual en administraciones anteriores, según señalara.

"Es necesario que los empresarios acepten que han sido incompetentes en la gestión de sus negocios y no vengan, de una forma cínica e hipócrita a responsabilizar al gobierno por sus propias incapacidades", declaró el mandatario, quien también es empresario.

A juicio del gobierno, el principal paso positivo de la economía brasileña fue dado por el inicio del programa nacional de privatización, con la venta de cuatro empresas a partir de octubre, con lo que el gobierno recaudó cerca de mil seiscientos millones de dólares. El programa entusiasmó tanto a los economistas del gobierno que ya se preparan para continuar las privatizaciones en 1992 y añadieron otras cuatro empresas a la lista original de 26.

Para Collor de Mello también es importante el acuerdo al que llegó el gobierno con los acreedores privados y que puso a Brasil, según el análisis oficial, de nuevo en buenas relaciones con la comunidad financiera internacional. En 1991 Brasil volvió a pagar, a partir de junio, a sus acreedores y cerca de tres mil millones de dólares fueron desembolsados como parte de intereses atrasados.

El próximo año no será fácil para los brasileños, según anunció Collor, para quien la política de ajustes seguirá teniendo consecuencias negativas en lo inmediato para la población, por lo menos en el primer semestre.

La aprobación de una serie de reformas a la Constitución en el Congreso, en el primer semestre de 1992, ayudará a estabilizar la economía y a recuperar el crecimiento, con menos intervención del Estado y más apertura a los mercados internacionales, según la receta formulada por el gobierno, con apoyo evidente del FMI.

El FIS triunfante en elecciones legislativas

AVANCE INTEGRISTA EN ARGELIA

Al obtener 126 escaños en la primera vuelta de los comicios legislativos en Argelia, el Frente Islámico de Salvación (FIS) podría obtener una mayoría decisiva en la Asamblea Popular Nacional, determinante para la formación de gobierno. El descreimiento y la desmoralización imperantes en el país magrebí, se tradujo en alto abstencionismo, dejando paso a los integristas que irán nuevamente por el triunfo en la segunda ronda de las elecciones el próximo 16 de enero.

por Patricio Rey

El proceso argelino parece a punto de dar un nuevo giro, según lo sugieren los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas del pasado jueves 26. En estas, las primeras elecciones pluripartidistas desde la independencia consagrada el 5 de julio de 1962, los resultados parciales para ocupar parte de los 430 escaños de la Asamblea Popular Nacional, fueron terriblemente desfavorables para el gobernante Frente de Liberación Nacional (FLN).

El Frente Islámico de Salvación (FIS), cuya gravitación en la política argelina ha sido contundentemente demostrada en los últimos tres o cuatro años, logró obtener 126 escaños que si bien no consagran la mayoría absoluta, sí le otorgarían una mayoría decisiva para la formación de gobierno, si repite su performance en la segunda vuelta.

En estos comicios, además del FIS y las distintas vertientes del FLN, se presentaron candidatos por 47 partidos, conformando un total de 5.712 postulantes, de los cuales 1.209 son independientes.

El descaecimiento económico y la desmoralización producto de una dinámica de revueltas y de crisis institucional, parecen haber sido los motivos que le dieron el triunfo a la organización islámica.

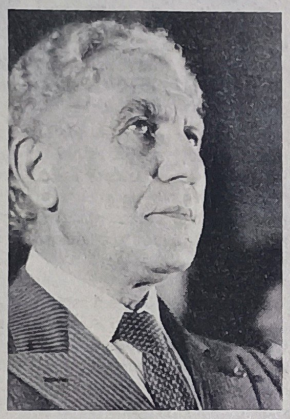
El alto número de abstenciones reflejó la indiferencia y el descreimiento, dejando una brecha por la que se coló la euforia de los integristas.

Lo destacable, al margen de los resultados, en estos comicios, fue la altísima participación de las mujeres, gracias a una nueva ley electoral que facilitó su ejercicio de voto. Y fue justamente en sus vías de expresión donde se pudo constatar parte de las premisas que están condicionando el proceso de este país del Magreb.

Envueltas en su tradicional "haik", muchas mujeres manifestaban que darían su voto al Frente Islámico para vengarse del gobierno al que acusan de responsable del deterioro económico y los males sociales que se padecen en el país. Muy pocas dijeron que votarían al FLN, mientras otras dieron su apoyo al FIS por convicción.

La historia de este proceso tiene raíces muy largas. Su momento último más agitado fue en junio pasado, cuando se avecinaban estas mismas elecciones (que serían el 27 de junio).

El FIS, temeroso de no lograr el apoyo que había recibido en los comicios del 90, dejándole un decisivo saldo de municipios a favor, lanzó una campaña de creciente agitación que concluyó cuando el gobierno de Chadli Benjedid sacó los tanques a la calle para neutralizar la insurrección que había arrastrado a mucha gente golpeada por el desempleo y la crisis económica. Más de setenta muertos y centenares de heridos fueron las consecuencias de estos agitados días. El gobierno de Benjedid dispuso entonces el estado de sitio y la postergación indefinida de la realización de las elecciones legislativas.



Chadli Benjedid, jaqueado por los integristas. En la foto central el Oasis de las mil mezquitas.

El FIS había logrado penetración en la sociedad explotando la ineficiencia del gobierno del FLN. Pero cuando ganó las elecciones municipales, su accionar fue tan decepcionante que el desencanto de aquellos que habían depositado alguna esperanza en esta alternativa, dio la pauta de que las cosas no le serían favorables al FIS en el futuro.

El gobierno de Benjedid, comandando un difícil proceso de democratización al cual justamente los integristas habían forzado desde las cruentas revueltas del 88, pareció asestar un nuevo golpe a la impopularidad del FIS, anunciando una nueva ley electoral para estas primeras elecciones legislativas pluripartidistas. El FIS denunció la nueva legislación, y acusó al gobierno de propiciar un mecanismo que tenía el fin de favorecer al FLN.

El dispositivo electoral otorgaba mayor peso a los votos rurales, disminuyendo el de las zonas urbanas que se erigen como bastiones islamitas. Sin embargo, detrás de la protesta del FIS y de su intento de llegar a una situación insurreccional, estaba el temor de perderlo todo ya que su administración municipal fue desastrosa.

En las esferas de la juventud, donde el FIS había reclutado la mayor parte de la adhesión que le diera la victoria, fue donde más se hizo sentir la decepción. Las promesas de empleos y viviendas, nunca llegaron a materializarse. Y en cambio, la acción de la ortodoxia más intolerante, convirtió al municipio en juez y censor moral de la sociedad, dedicando todos sus esfuerzos en la persecución de conductas "laicas y liberales". Cierre de cines y centros culturales, fueron unos de los tantos intentos de islamizar en sus dominios, destacándose la opresiva persecución de las mujeres con el objeto de disciplinarlas de acuerdo a las preceptivas religiosas.

Mientras la vigilancia religiosa se estatuía en policía política, el empobrecimiento de la gente se hacía cada vez más acelerado, los niños abandonados se multiplicaban y, como una peste, el analfabetismo se expandía completando el panorama de deterioro del nivel de vida.

Esta situación forzó la salida desesperada de los integristas. Dirigidos por Abasi Madani y Alí Belhadj, arrastraron muchedumbres a las calles, sacando provecho de una situación de estancamiento.

Pero la cruenta represión del gobierno, si bien logró neutralizar el estado de preinsurrección, encarcelando además a los líderes del FIS, puede ayudar a concluir a la luz de los resultados electorales de la semana, que terminó con el poco margen de esperanza que restara entre los argelinos.

Por otra parte, las diferencias en el seno del FLN y la caída del gabinete de Mouloud Hamrouche enseguida de la revuelta de junio - julio, dejó muy claras las discrepancias existentes en las estructuras de poder, que como resultado dejara un peligroso estado de inoperancia, ineficacia, descontrol administrativo y la inexistencia de una política económica y otra democratizadora, definidas.

El próximo 16 de enero será la fecha decisiva. Se llevará a cabo la segunda vuelta de las legislativas, que pautará el futuro inmediato de Argelia. Al quedar anulada la variante del triunfo del sector del Frente de Liberación Nacional liderado por el ex primer ministro Mouloud Hamruche, y afirmarse la del avance integrista, las opciones manejables no dejan mucho margen al optimismo.

Los analistas internacionales identificaban estas dos variantes con el triunfo de los sectores democráticos y el desastre. En ello hay mucho de cierto. La formación de un gobierno de corte integrista no augura nada agradable, en vistas del muestreo que ha hecho el FIS en estos últimos años. Y por si fuera poco, en caso de que el FIS fortalezca su presencia, ¿qué pasará con el ejército?